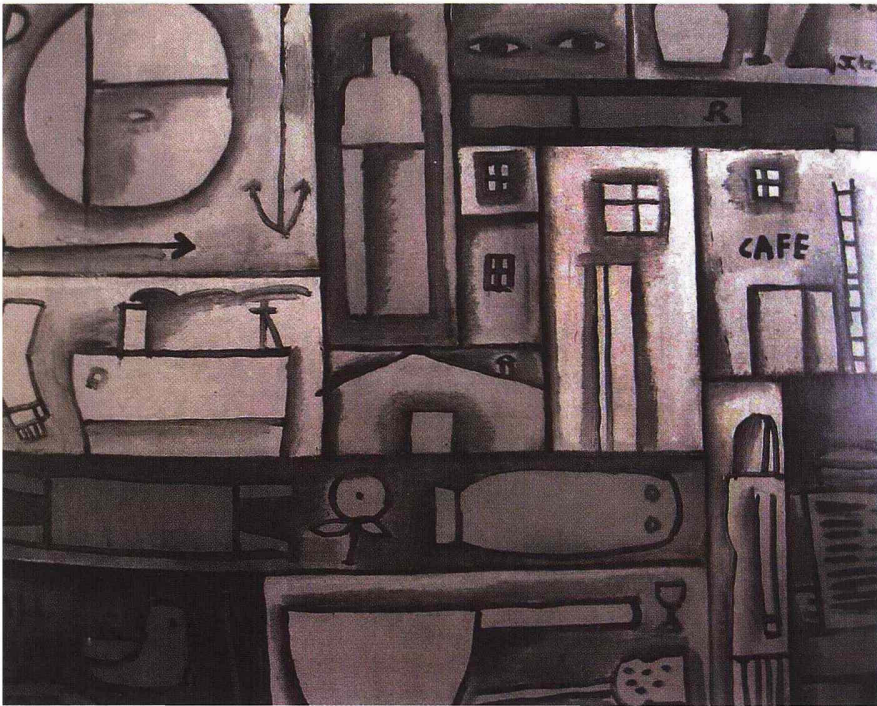


<b>Medio</b>	Le Monde Diplomatique
<b>Fecha</b>	20-05-2010
<b>Mención</b>	A estudio de Claudio Agostín, "Falso dilema tributario".

**Equidad tributaria:**

# Qué Chile reconstruir

por Libio Pérez\*



José Gurvich, Constructivo en gris, 1962 (Gentileza Galería Aninat)

Un alza de impuestos directos a las empresas pero acotada en el tiempo, un aumento “voluntario” al royalty a las empresas mineras y mayores contribuciones a las propiedades de alto valor, forman parte del paquete tributario que adoptó el gobierno de Sebastián Piñera para financiar el plan de reconstrucción de la zonas chilenas afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado. Aunque inicialmente el alza de impuestos provocó resistencias en los sectores más fundamentalistas de la propia coalición derechista que gobierna, así como entre los grandes empresarios, Piñera consiguió imponer su plan y, de paso, tomar la iniciativa política que no lograba retener a poco más de un mes de asumir el sillón presidencial.

Para el gobernante, el plan difundido el 16 de abril para hacer frente a la devastación que dejó el terremoto y el tsunami de febrero es su nueva carta de navegación, que no sólo le permite manejar la agenda política, comunicacional y legislativa sino además desplazar y arrinconar a una oposición parlamentaria que no logra armarse. Los tiempos políticos de más corto plazo corren a favor del mandatario, cuyo plan de reconstrucción será financiado casi en un 40 por ciento por su propuesta de reforma tributaria (1).

El alza de impuestos a las empresas y los mayores tributos a las propiedades de alto valor, la mayoría de ellas ubicadas en los barrios más pudientes de Santiago y otras grandes ciudades, también tienen el valor agregado de diluir la imagen de que Piñera lidera un gobierno de empresarios gestionado por gerentes, pese a que él mismo no haya cumplido a tiempo con su promesa de deshacerse de la propiedad de aquellas empresas que le generan conflictos de interés.

El plan para recaudar 8.400 millones de dólares supone un ingreso adicional por impuestos de 3 mil millones de dólares a lo largo de los cuatro años del período de gobierno, mientras al resto del dinero proviene del fondo de riqueza soberana de Chile (generado básicamente por los excedentes en los ingresos del cobre), emisiones de bonos, recortes en gastos públicos y ventas de activos.

El equipo económico del gobierno y el propio Piñera se han esforzado por explicar a los empresarios que la reforma es limitada en el tiempo, toda vez que los impuestos a las empresas aumentarán del 17 por ciento al 20 por ciento en 2011, para retroceder en 2012 al 18,5 por ciento y en 2013 regresar al 17 por ciento actual. Se trata de una medida para hacer frente a la emergencia provocada por el sismo en la zona centro-sur de Chile. Pero, en ningún caso, de una iniciativa que busque hacer más equitativo y horizontal el sistema tributario.

El paquete de medidas que eleva los tributos a las empresas también incluye compensaciones para el empresariado, que vienen por otro lado. Primero, con la ya aprobada Ley de Donaciones, que estimula el aporte voluntario de los privados a cambio de descuentos tributarios de hasta un 50 por ciento, al tiempo que les permite decidir hacia dónde son orientadas esas contribuciones. En otras

palabras, la ley limita al Estado la facultad de disponer de la inversión de los recursos públicos obtenidos vía donaciones en aquellos sectores o lugares donde puedan ser más urgentes o necesarios.

El plan de reconstrucción también supone el recorte de gastos fiscales, que ya significó una disminución de un 5 por ciento de los presupuestos de todos los ministerios, así como la entrega de menos recursos a las regiones que no sufrieron el terremoto, aunque sus indicadores de pobreza y desempleo sean iguales o peores que los de las zonas afectadas por el sismo.

También el plan incluye la venta de activos del Estado, entre los que están la enajenación de las participaciones minoritarias en las empresas sanitarias y la privatización de la eléctrica Edelnor, creada para abastecer y proporcionar independencia energética a la Corporación del Cobre (Codelco).

Pero entre las medidas de compensación que ofreció el plan de Piñera que más ha llamado la atención a los especialistas está la iniciativa de aumentar el royalty a la minería (que en esencia es un impuesto específico) a aquellas empresas que voluntariamente quieran hacerlo a cambio de prolongar la invariabilidad tributaria por ocho años más. La medida deja “amarradas” las ganancias de las mineras del cobre por más de un cuarto de siglo, sin que el Estado pueda modificar esos plazos.

La ex presidente Michelle Bachelet apuntó a esta característica del plan de Piñera cuando dijo que le llamó la atención que el alza tributaria sea “transitoria y las rebajas sean permanentes” (2).

En los últimos 25 años, la derecha chilena ha tenido que hacer frente a dos crisis combinadas derivadas de fuertes turbulencias económicas internacionales y de desastres provocados por la naturaleza.

Primero, en 1985, cuando Chile apenas



salía de la crisis de inicios de la década y el terremoto de ese año, que dejó pérdidas por más de 1.000 millones de dólares de la época, casi 150 mil viviendas destruidas y daños considerables en la infraestructura vial.

En marzo de este año, y a sólo meses de la crisis económica global más seria desde la Gran Depresión, Chile tuvo otro terremoto, esta vez acompañado de un maremoto, que produjo daños cifrados en unos 30 mil millones de dólares, unos dos millones de damnificados y más 500 mil viviendas destruidas o con daño severo.

En ambos casos, la derecha militar primero y la derecha civil después, los efectos de las crisis económicas y los de la destrucción sísmica fueron enfrentados con planes y medidas que buscaron preservar los intereses de los grandes inversionistas. En 1985, el entonces ministro de Hacienda de la dictadura militar, Hernán Büchi, (que había asumido el cargo sólo 20 días antes del terremoto) profundizó la apertura de la economía y lanzó la más amplia ola privatizadora de las empresas públicas. Su gestión consolidó en pocos años un nuevo reordenamiento de los grupos económicos y dibujó un nuevo país que perduraría por las décadas siguientes (3).

En el 2010, el equipo económico de Piñera “no quiere ser recordado sólo por la reconstrucción. Se comprometió a aumentar el crecimiento a 6 por ciento al año, convirtiendo a Chile en un país desarrollado en 2018”, recordó la revista *The Economist* (4). Pero en ambas oportunidades, la derecha opta por alivianar el esfuerzo del sector privado, sin acometer cambios más profundos que permitan reducir la enorme brecha que separa a los más ricos de los más pobres. Ello consolida el mismo Chile que fue reconstruido después del terremoto de 1985.

El politólogo Robert Funk, subdirector académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile estima que

es necesario aumentar la carga tributaria del país para instaurar un “Estado moderno y desarrollado”, como quedó claro en la última campaña presidencial e incluso lo requiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Chile se asoció a inicios de este año (5).

Pero el gran empresariado no está para buscar equidades. Así lo dejó claro Guillermo Luksic, presidente de Quiñenco, quien dijo que “si se trata de una emergencia tan importante como la que hemos tenido, un alza transitoria de los impuestos es algo que podemos hacer y veremos la forma de enfrentarlo. No me parece la forma ideal, porque eso también afecta el crecimiento, la inversión y el empleo, y al final todos los chilenos terminan pagando porque hay menos trabajo e inversión” (6).

Es la misma tesis que ahora levanta el ex ministro de la derecha militar, Hernán Büchi, quien ha insistido que “cuando se les cobra un impuesto a las empresas, en el fondo o suben los precios, o invierten menos o emplean menos, y por lo tanto lo pagan los cesantes, o se suben los precios y lo pagan los consumidores”. Para el ex candidato presidencial, el gobierno de Piñera pierde la oportunidad que le ofrece el terremoto para imprimir un sello diferenciador de las administraciones de la Concertación y de hacer frente a “la baja productividad de la economía”, que le permitiría relanzar un nuevo ciclo de crecimiento. Es decir, sellar una impronta que marque el tipo de Chile que hay que reconstruir.

Ese es el debate que abre la reforma tributaria que propone el gobierno y que tendrá como campo de batalla el Congreso. La participación ciudadana estará ausente del debate técnico, así como de todas las instancias donde se decida qué tipo de reconstrucción se pone en marcha, más allá de la superación de la emergencia donde las redes sociales han puesto de relieve la solidaridad entre los más afectados y que de alguna forma han mitigado las ineficiencias de las autoridades gubernamentales.

Hay una oportunidad para pujar por un sistema tributario equitativo y horizontal, instaurar impuestos progresivos que impidan que quienes devengan altos ingresos eludan o evadan tributos declarando sus ganancias a través de empresas que, a final de cuentas, pagan menos que las personas (7).

Qué Chile reconstruir queda así puesto en el centro del debate. ♦

- 1 Ver Plan de Reconstrucción 2010-2013 en [www.gobiernodechile.cl](http://www.gobiernodechile.cl)
- 2 Cambio 21, Santiago de Chile 24 de abril del 2010
- 3 Hernán Büchi, en su libro “La transformación Económica de Chile - Del Estatismo a la Libertad Económica”.
- 4 *The Economist*, Londres, 22 de abril del 2010
- 5 Agencia IPS, Santiago de Chile, 20 de abril del 2010
- 6 *Diario Financiero*, Santiago de Chile, 21 de abril del 2010
- 7 Falso Dilema Tributario, Claudio Agustín, Universidad Alberto Hurtado.

---

\*Editor General de la edición chilena de *Le Monde Diplomatique*.